

## **Balance de la situación de los derechos humanos en El Salvador 2013**

1. En mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, presento un balance sobre los hechos y situaciones más relevantes que tuvieron incidencia en el respeto y garantía de los derechos humanos en el 2013.
2. En relación a la investigación, juzgamiento y sanción de las **graves violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado**, persistió la impunidad y pasividad del Órgano Judicial y la Fiscalía General de la República. Una noticia que generó expectativas fue la admisión de una demanda de inconstitucionalidad presentada por organizaciones sociales contra la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, por la trasgresión a varias disposiciones constitucionales y otras contenidas en tratados internacionales en materia de derechos humanos.
3. Asimismo, se constataron dos hechos lamentables que **atentaron contra las labores que realizan organizaciones sociales identificadas como entidades defensoras de los derechos humanos** (Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos), y que dejaron en riesgo y vulnerabilidad la documentación histórica e importante para impulsar acciones judiciales sobre casos del conflicto armado (Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador). Esta Procuraduría asumió desde un inicio un rol protagónico en la denuncia de tales hechos, y exhortó a las instituciones competentes a la adopción de medidas urgentes.
4. Respecto a la **adopción de medidas de reparación para las víctimas y sus familiares del conflicto armado**, anunciado por la presidencia el año pasado, se destacó la continuación del diálogo entre el gobierno y las organizaciones sociales de derechos humanos, que dio paso a la creación vía decreto ejecutivo de un programa de reparaciones, que incluye un registro de víctimas y la definición de medidas de reparación, entre ellas garantías de no repetición. Con la ejecución adecuada de este marco jurídico, el gobierno estaría sentando las bases para dignificar a las víctimas del conflicto e iniciando un verdadero camino hacia una reconciliación nacional.
5. En materia de derechos civiles, de acuerdo al Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014: Seguridad ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina, **El Salvador continúa siendo considerado como uno de los países latinoamericanos con mayores índices de violencia letal**. Así, las altas tasas de homicidios y victimización en diferentes delitos, como los datos exorbitantes de personas privadas de libertad y la impunidad sistemática han generado afectaciones a la vida, la integridad, y el patrimonio de las personas en todo el territorio nacional.
6. Muestra de ello es que **la inseguridad ciudadana relacionada con las pandillas criminales** continuó de manera intensa en el país. Luego del anuncio de la tregua entre las principales pandillas en marzo del 2012, se reportó una disminución de homicidios a menos de la mitad de las cifras presentadas en los meses anteriores, alcanzando para mediados del 2013 una reducción sostenida del 40%. En total, de enero a noviembre de 2012 se reportaron 2,406 homicidios; en el mismo periodo del 2013, se reportaron un total de 2,289, representando una disminución de 117 homicidios a nivel nacional. Sin embargo, según datos de la PNC, entre julio y noviembre de este año, las cifras en los homicidios aumentaron en relación al mismo periodo del año anterior. Respecto a otros tipos de delitos, se reportan niveles altos pero registrando una tendencia hacia la disminución en relación al año pasado. Así, según datos obtenidos por la PNC, hasta octubre de 2012 se reportaron 4,553 robos, para esa mismo mes en

2013, se contabilizaron 4,414, representando una disminución de 139; se registraron 8,387 hurtos en el 2012 en contraste con 7,826 del 2013, con una diferencia de 561; en cuanto a las extorsiones, en el 2012 se reportaron: 2,485, y a octubre 2013 se tenían 2,349, con una diferencia de 136 casos.

7. Esta Procuraduría ha seguido monitoreando la **situación de las personas privadas de libertad**, en la que constató la presentación de contenedores -celdas móviles- en las Bartolinas de Monserrat, lo cual representa una alternativa ante la problemática del hacinamiento. Sin embargo, persisten además de éste problema, deficiencias como la superpoblación penitenciaria, la ausencia de estructuras físicas adecuadas, malos tratos infringidos a los internos por custodios, retardación de justicia, entre otros que continúan presentes en estos centros a nivel nacional. En el próximo año, la Procuraduría continuará dando seguimiento al tema de la seguridad por medio de la implementación de un Observatorio de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos el cual evaluará, por medio de indicadores, las políticas y acciones públicas adoptadas.

8. En materia de derechos políticos, **se aprobaron importantes reformas electorales**, algunas de ellas que fueron transitorias para las elecciones pasadas pasaron a ser permanentes, tales como el uso de fotografía y candidaturas no partidarias para las elecciones legislativas; también se promovieron reformas novedosas como el Código Electoral, la Ley de Partidos Políticos, la Ley Especial para el Ejercicio del Voto desde el Exterior. Esta Procuraduría aplaudió ésta última medida porque constituye un paso importante en la garantía de los derechos políticos. No obstante, en su aplicación, los fondos asignados fueron insuficientes y aprobados tardíamente, lo que limitó su alcance, arrojando pobres resultados respecto a la cantidad de personas que lograron inscribirse en el registro electoral, lo que implicará un reto para las autoridades electorales dar mayores facilidades y ampliar el número de votantes para las futuras elecciones.

9. Por otra parte, desde el **inicio legal de la campaña electoral**, las propuestas de los partidos políticos mayoritarios en contienda se han caracterizado por atacar a sus rivales, en vez de hacer propuestas reales y de beneficio para la sociedad salvadoreña. Tal es así que el Tribunal Supremo Electoral ha recibido denuncias relacionadas con la campaña electoral y ha sancionado a los partidos políticos en algunos casos. A pesar de que esta Procuraduría ha solicitado información al TSE sobre las resoluciones emitidas en dichos casos, a este día aún no se ha recibido respuesta.

10. Es de destacar también la **intención de ampliar las medidas sancionatorias de carácter económico a los medios de comunicación** en el caso que transmitan publicidad pagada que contraviene a la normativa electoral. Ante tal situación, se vuelve imperante recordar que el TSE es la autoridad máxima en materia electoral, por lo que le corresponde estar vigilante de que la normativa electoral se cumpla, tomando en cuenta que el control de la propaganda electoral debe ser muy cuidadoso para no incurrir en violación a la libertad de expresión por medio de la creación de mecanismos de censura previa.

11. La actual gestión pública continuó realizando importantes esfuerzos para garantizar los **derechos económicos, sociales y culturales**, a través del impulso de programas sociales para enfrentar situaciones críticas de alimentación, salud, educación e ingresos que afectan a la población salvadoreña. No obstante, de acuerdo al Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013, los programas orientados a erradicar la pobreza han priorizado un enfoque asistencialista, por lo que se sigue sin resolverse el

problema social esencial: la falta de oportunidades equitativas para el desarrollo de las capacidades de la gente.

12. Esta Procuraduría llamó la atención sobre **varios hechos que comprometieron la vigencia de los derechos sociales**, tales como la no ratificación de la reforma constitucional sobre el derecho a una alimentación adecuada; los múltiples fallecimientos a causa de la Enfermedad Renal Crónica; la afectación a las libertades sindicales en el Órgano Judicial; los diversos casos de mala praxis médica; los despidos en la Alcaldía de Apopa; y la suspensión de labores en hospitales del sistema nacional de salud, relacionado con el desfinanciamiento del Escalafón Salarial 2014. No obstante, se destaca el **esfuerzo del gobierno para garantizar la atención a la salud de la población**, como la inversión para la construcción de la red hospitalaria, el aumento de la cobertura de la atención primaria en salud, así como de la infraestructura sanitaria; y en especial, la regulación de venta de medicamentos y disminución de precios, así como la creación de una institucionalidad que se mantiene vigilante del cumplimiento de tales medidas.

13. En materia de protección al medio ambiente, esta Procuraduría lamentó la **inactividad de la Asamblea Legislativa** por la falta de ratificación de la reforma constitucional que reconoce el derecho al acceso al agua, medida que fue aprobada por el período legislativo anterior, y que ha sido respaldada por las organizaciones sociales y esta institución. Asimismo, ha dilatado la discusión y aprobación de la Ley General de Aguas y la Ley Especial de Prohibición a la Minería. Un hecho que preocupó a esta institución fue el **abandono de barriles que contienen toneladas de tóxicos en el municipio de San Luis Talpa del Departamento de la Paz**, que deja en inminente situación de contaminación ambiental y riesgo a las personas que habitan en el cantón òLoma de Galloö de la referida localidad. Esta Procuraduría reconoció como positiva la aprobación del Decreto de Ley Transitoria, el cual posibilita - en el corto plazo- el retiro de los tóxicos abandonados; retiro que ha representado una de las exigencias más vehementes de la población local.

14. Respecto a la **protección y garantía de los derechos de la niñez y adolescencia** se denotan importantes acciones públicas que merecen ser reconocidas como avances, tales como la aprobación de la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, efectuada por el Consejo Directivo del CONNA, los esfuerzos realizados por el Ministerio de Educación, la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción y organizaciones de la sociedad civil en la coordinación de las acciones para la aplicación del òProtocolo de actuación para el abordaje de la violencia sexual en las comunidades educativas de El Salvadorö, entre otras iniciativas de instituciones públicas. Pese a estos avances, la situación en que viven la mayoría de niñas, niños y adolescentes en el país continúa siendo precaria, al persistir la vulneración de sus derechos de supervivencia y crecimiento integral, así como sus derechos a la protección, al desarrollo y a la participación.

15. En materia de **derechos humanos de las mujeres**, se tuvo conocimiento del **caso de òBeatriz Garcíaö**, una joven salvadoreña que padecía de una enfermedad que afecta el sistema inmunológico y deteriora los órganos vitales del cuerpo, y que a la vez se encontraba embarazada de un feto con anencefalia, quien fue puesta en grave riesgo por las autoridades sanitarias por negarle un tratamiento médico de emergencia -aborto terapéutico-, debido a las posibles sanciones penales que este acarrearía. El referido caso alcanzó notoriedad nacional e internacional, sin embargo no provocó una discusión seria en la Asamblea Legislativa sobre las reformas necesarias a la Constitución de la República y el Código Penal que permitieran la despenalización del aborto. En el campo de los derechos humanos, la

vigencia de este tipo de marcos jurídicos constituye una violación a los derechos reproductivos de las mujeres, incluyendo el derecho a la salud, a la libertad, a la seguridad y potencialmente el derecho a la vida.

16. Respecto a la **libertad de expresión y protección a periodistas y profesionales de la comunicación**, esta Procuraduría tuvo conocimiento de atentados y amenazas a muerte en contra de este sector; condenó tales hechos y formuló recomendaciones a las autoridades correspondientes a llegar a la verdad detrás de estos crímenes, encontrando a los autores, procesando y sancionando a los responsables. Asimismo, ha recomendado que se cuente con un marco jurídico adecuado que proteja a dichos profesionales tanto de las amenazas externas, como también de situaciones que inciden negativamente en el ejercicio de la profesión, al verse enfrentados con malas condiciones laborales y de seguridad social.

17. Otro tema relacionado con la libertad de expresión es el establecimiento de la **subasta pública como el único mecanismo para la asignación de concesiones de frecuencias radioeléctricas** (operación de radio y televisión), para esta Procuraduría, el mecanismo de subasta pública puede violentar los derechos a la igualdad y a libertad de expresión porque el otorgamiento de una concesión puede basarse únicamente en el aspecto económico, favoreciendo de esta manera a personas naturales o jurídicas con mayor poder adquisitivo.

18. Esta Procuraduría observó con preocupación la ocurrencia de **ataques violentos contra las y los miembros de la Comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (LGBTI)**, así como las graves deficiencias en la atención a situaciones de asesinatos y amenazas de personas por su identidad de género u orientación sexual y el poco esmero que las denuncias sobre dichos hechos han recibido por parte de las instituciones encargadas de la seguridad y la investigación de los delitos.

19. En materia de los **derechos de los pueblos indígenas**, se observaron varias medidas públicas importantes tendientes a abrir espacios para la participación de organizaciones sociales y programas para garantizar sus derechos específicos. No obstante, el proceso de reconocer e impulsarlos todavía se encuentra en su fase inicial y requiere de muchos esfuerzos estatales para alcanzar su realización. Tal es el caso de la falta de ratificación de una reforma constitucional y la recepción en el derecho interno del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

20. En este año, esta Procuraduría reconoció algunos adelantos importantes en materia de los **derechos de las personas con discapacidad**, perceptible en las áreas de educación inclusiva, salud, trabajo, entre otros, pero que han resultado ser mínimos, lo que indica que todavía son insuficientes los esfuerzos para lograr la plena inclusión de dicho sector poblacional. Preocupa que se mantenga la reserva hecha por el Estado a los instrumentos internacionales relacionados en la materia, respecto a impedir la aplicación de sus normas que contravengan la Constitución de la República; así como la falta de cumplimiento a las normas que garantizan el derecho a la accesibilidad, violaciones al derecho a la educación, salud, trabajo y empleo, entre otras.

San Salvador, 17 de diciembre de 2013.

**Lic. David Ernesto Morales Cruz**  
**Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos**